

EDITORIAL

CIEN DIAS DE LEVEDAD GUBERNAMENTAL



La calificación que ha merecido la gestión gubernamental para los distintos estratos sociales, altos y bajos, no sobrepasa la calificación de seis (un precario "regular" en la escala de 10 como máximo). A falta de logros concretos de gobierno, la opinión pública auscultada se ha rebuscado en ponderar aspectos, que a juicio de expertos tampoco merecen la escasa nota alcanzada, como el "aseo y ornamento", que obtuvieran el mayor número de referencias favorables. Habla mucho de la bondad ciudadana que ante sus problemas cotidianos irresueltos vea en las deterioradas calles y parques sin presupuestos lo mejor que un gobierno, que dice avanzar hacia la modernización económica y estatal, haya hecho en sus primeros cien días. Por otra parte, la imagen está formada en acciones que se hicieron en la administración pasada y en el gobierno municipal.

La imagen gubernamental actual se ha desmejorado en comparación al período de Cristiani. Sólo uno de cada tres salvadoreños afirma que existen cambios positivos y esta persona —con una alta probabilidad— pertenece al sector urbano, reside en colonias exclusivas del área metropolitana y proviene de los sectores altos de la escala social. La falta de programa de gobierno, el aún no cumplimiento de las promesas electorales y de importantes acuerdos de paz, los problemas de seguridad de toda índole (jurídica, social, ciudadana, pública, laboral) y otras deficiencias se acumulan en los primeros tres meses del segundo gobierno de ARENA para

formar este resultado.

En otra dimensión, pobreza, escasez, alza de precios de artículos básicos y de los servicios públicos, especulación, sequía, delincuencia, corrupción y tráfico de influencias, evasión fiscal, división de los partidos, propuestas de mejorar la seguridad pública que recuerdan los años militares anteriores, querellas al interior de la izquierda y de la derecha, y otros hechos de igual importancia conforman la cotidianidad del país. La opinión pública, no obstante, enfatiza mayoritariamente en dos aspectos: el incremento del costo de la vida y la delincuencia.

Desde todo punto de vista, los primeros cien días de la administración de Calderón Sol han sido problemáticos y no sólo por lo que bien ha captado la opinión pública. Esta le ha dado un compás de espera, sólo así puede explicarse que siendo los problemas básicos de la gente el alto costo de la vida y la delincuencia, para evaluar la acción gubernamental decida calificarlo, para no reprobarlo, sobre un aspecto diametralmente distinto. Quizás la esperanza en la transición produce éstas extrañas situaciones de dislocación entre intereses/necesidades no resueltas y opiniones.

Debe introducirse otros aspectos al análisis de los primeros cien días del segundo gobierno de ARENA. Es claro que sabemos lo que el gobierno debe de hacer y no hace, lo que prometió hacer y lo que no hizo. Ahora debemos reflexionar sobre *¿POR QUE NO LO HIZO?* En algunos casos los recursos no lo han permitido, en otros, la voluntad no aparece muy eficiente. Pero no todo depende de la voluntad, capacidad de dirección, recursos técnicos de decisión o ejecución que una persona o un equipo tengan o no, cualquiera que sea la forma en que la nueva administración de ARENA esté funcionando. Gobernar no sólo es un problema técnico para orientar cargos y competencias, para mantener o subir indicadores sociales y económicos y para presentar resultados neutrales e incontaminados que sólo satisfagan "necesidades básicas inmediatas". Se hace necesario pensar en las condiciones y dificultades de poder del gobierno para actuar como tal y cumplir promesas y expectativas de la ciudadanía salvadoreña.

La levedad del gobierno ante la densidad de los conflictos de los sectores y fracciones socio-políticas que luchan para mantener-

se o desplazarse unos a otros en la conducción del Estado, que rompen sus viejas coaliciones y tratan de crear otras, con gran incertidumbre sobre su posibilidad de sobrevivencia, y que involucran al Estado para obtener ventajas en la solución de sus pugnas y defensa de intereses. Ante el choque de los grupos sociales y políticos entre sí, sobre todo en los sectores dominantes, el gobierno mantiene una actitud permisiva que promueve el enfrentamiento inútil y al desgaste innecesario de la vida pública. Su capacidad de intermediación entre los grupos es casi nula y el gobierno es visto por una parte de esta contienda más como grupo político que como gobierno mismo.

El debate sobre el tráfico de influencias y la corrupción ha mostrado no sólo la existencia rutinaria y la cotidianidad con que éstas se desarrollan en favor de uno u otro grupo, dependiendo de quienes son los que gestionan "la cosa pública" —una verdad de perogrullo— sino que el tema sale a la luz pública para dirimir conflictos políticos intra-partidarios, para anular posibles candidatos a los puestos directivos del partido oficial, para limpiar la mesa de candidatos inconvenientes para uno u otro grupo que persiguen controlar el COENA de ARENA. Los intereses en juego han sido muy fuertes para deslindar al Estado de esta pugna partidaria y el equipo de gobierno muy liviano para saber conducir en el campo pertinente la solución de estos conflictos.

Posiblemente pasada la elección de este importante organismo para la derecha salvadoreña, las aguas vuelvan a su nivel y se olviden las denuncias y señalamientos. Posiblemente se busque un nuevo pacto entre las derechas para la gobernabilidad necesaria. Por el momento se utilizan los vicios públicos para dirimir conflictos políticos privados o corporativos. Mientras las pugnas de los grupos de derecha continúen, la estabilidad institucional será muy precaria. Entre la derecha, la legitimidad de los grupos que gestionan el aparato estatal aún no se ha completado, la dirigencia gubernamental no tiene plan para lograrlo a corto plazo y la posibilidad de un eficiente programa de gobierno consensuado entre los sectores derechistas o, al menos respetado, no logra aún perfilarse.

Por otra parte, y sin querer negar lo avanzado en los cumplimientos de paz, es curiosa la opinión favorable que muchos han expresado sobre el gobierno calderonista y su cumplimiento. Pre-

cisamente, es el incumplimiento en la entrega de indemnizaciones y de las tierras, pero más en general en procurar la inserción de los desmovilizados a la vida productiva del país, el factor más importante que ha impulsado uno de los problemas más sentidos por la población, como es la delincuencia.

El resultado de esta incapacidad gubernamental es un problema grave para la población. La composición de las bandas y grupos de delincuentes capturados muestran elementos de desmovilizados de ambas partes anteriormente enfrentadas, de los ex-cuerpos de seguridad que no contaron con proyectos funcionales de reinserción. Pero este hecho de los desmovilizados muestra otra dimensión de política global mucho más preocupante. Las acciones que las organizaciones de desmovilizados han realizado, tales como las manifestaciones, las distintas tomas de la asamblea nacional y edificios públicos, son un verdadero desafío al nuevo orden proveniente de las antiguas fuerzas militares y de seguridad pública. Es una amenaza impulsada por las anteriores brigadas especiales, de ex-agentes policiales, defensas civiles y por oficiales en cuerpos de seguridad que están por desaparecer en los próximos meses. Por un lado, el gobierno no puede extinguir los problemas del sistema de seguridad anterior que se prolongan de manera conflictiva y, posiblemente con nexos con sectores militares añorantes del pasado, y, por otro lado, no puede terminar el diseño del nuevo sistema de seguridad en el que se cuelan estas fuerzas añorantes y soluciones del pasado que a nadie tranquilizan.

Así, en sus primeros cien días, el gobierno ha encontrado dificultades para alcanzar su legitimidad completa y para definir el nuevo marco socio-político para la definición del nuevo sistema de seguridad nacional que permite que las pugnas entre los grupos de la derecha continúen sin fin y de manera desestabilizante. Los grupos de derecha mantienen una lucha por el partido y por el Estado o por un equilibrio que los lleve a cuotas de poder más aceptables para los intereses de cada una de ellas. Desde esta perspectiva, el sistema de seguridad que puede producirse estará constituido por los alcances y luchas que desarrollen estos grupos, por sus negociaciones y concertaciones. Y no por las conveniencias de la pluralidad de todas las fuerzas del espectro político y social del país. Sin querer agotar otros factores para catalogar la ejecución

del gobierno en su primer centena de días, estos problemas impiden eficiencia a cualquier gobierno.

Por otra parte, en el campo económico el gobierno se precia de haber dado cumplimiento al programa monetario y financiero, que entre otros resultados tiene el mérito de impactar y presionar en los escasos recursos salariales de la población, que hacen el otro gran problema sentido de los salvadoreños. Los avances macroeconómicos no llegan reflejarse en la economía familiar que cada vez está más deteriorada por el constante incremento del costo de la vida. Las amenazas de una nueva devaluación oscurecen la cada vez más exigua economía familiar. La acción gubernamental no ha mostrado eficacia para solucionar los problemas de los sectores sociales más vulnerables a las fluctuaciones económicas, no obstante las políticas de compensación que son mostradas como soluciones a la pobreza cada vez más amplia.

Por el bien de la estabilidad del país, del bienestar de los grupos populares, es de esperarse que el gobierno, en los días que vienen, muestre mayor eficiencia política y técnica para realizar acciones que fortalezcan al estado frente a las pugnas grupales de la derecha y que muestren capacidad para hacer coincidir las soluciones por ellos propuestas con los problemas reales de la población.

